

Lluvia negra

El doctor Scremin reside actualmente en California donde profundizó sus estudios sobre las consecuencias de los agroquímicos para el sistema nervioso central. Asegura que mientras en Santa Fe se discuten las distancias para las fumigaciones aéreas, la Comunidad Europea está a punto de prohibirlas directamente. Y advierte que probablemente el más peligroso agroquímico sea el DDT que está prohibido en Argentina, pero sigue habilitado el endosulfán "que es muy cercano a ese producto".

Por José Maggi

"Mientras Europa y Estados Unidos prohíben plaguicidas neurotóxicos como el endosulfán y el clorpirifos (dos productos que se le agregan al famoso glifosato) Argentina ha visto crecer nueve veces la cantidad recibida entre 1995 y el 2005. Así los nueve millones de kilos de plaguicidas que se arrojan en un año en nuestra tierra, bastarían para matar a toda a población mundial". La frase pertenece a Oscar Scremin neurofisiólogo rosarino y experto en el estudio de las afecciones que sufre el sistema nervioso central como consecuencia del contacto con plaguicidas. Fue el último decano de Medicina antes del golpe de estado del 76, que lo obligó a marcharse a los Estado Unidos, donde profundizó sus estudios. Su último viaje a estas tierras coincidió con la discusión en esta provincia de la influencia de los agrotóxicos en la salud de la población. Y no se mostró ajeno al debate. "Cuando en Santa Fe se discuten las distancias para las fumigaciones aéreas, la Comunidad Europa está a punto de prohibirlas: entre los argumentos, hay un estudio que reveló que los plaguicidas arrojados en Alemania, fueron detectados en Groenlandia". Por si fuera poco Scremin deja una cifra aterradora: "En el mundo está prohibido el uso de 38 agroquímicos distintos, pero en el país se comercializan 18 de ellos. Se entiende, porque comercializarlos es un buen negocio. Por ejemplo en Estados Unidos estas patentes cuestan monedas y han logrado que ese gobierno les permita fabricarlos para exportarlos. Y sí, entre otros la Argentina es un país de destino", confiesa el experto. Scremin deja también en esta nota un dato más que preocupante. Advierte que "Europa está rechazando los sábalos extraídos del río Paraná por el exceso de endosulfán que encuentran en sus tejidos. Y este es el mismo río donde habitan tantas otras especies con la que se alimenta toda esta región".

Oscar Scremin es médico, se recibió en 1963 en la Universidad Nacional de Rosario. Inclinado hacia la investigación científica viajó a Escocia a especializarse durante dos años para luego volver y organizar un laboratorio de neurofisiología. Así en el año 1973 fue

decano de la Facultad de Medicina donde trató llevar adelante un cambio curricular con un contenido social. En 1976 tuvo que emigrar luego del golpe de estado. De este modo recaló en la Universidad de California en Estados Unidos, donde terminó sus estudios. En estos momentos está tratando de organizar un grupo de trabajo para estudiar diversos problemas de fisiología entre otros otro la toxicidad de los plaguicidas que atacan al Sistema Nervioso Central.

En una extensa charla con Rosario/12 Scremin remarcó el fenomenal crecimiento que tuvo el uso de plaguicidas en los últimos años en la Argentina. "Si tomamos uno que se usa con más frecuencia el clorpirifos, que es un órgano fosforado de la misma familia del gas nervioso que es un arma destrucción masiva que se ha utilizado lamentablemente en diversas oportunidades para eliminar grupos enteros de personas. Este producto clorpirifos se vendía en el orden de los 500 mil kilos de acuerdo a las estadísticas en 1995, en el año 2005 llegó a los 4 millones y medio de kilos".

"Si uno mira el gráfico es un crecimiento acelerado. Si sumamos todos los plaguicidas del mismo grupo del tipo clorpirifos, que son neurotóxicos, la Aduana de Buenos Aires ha detectado en el año 2006 unos 9 millones de kilos, que es una cifra considerable, si uno considera que solo un gramo de esta sustancia puede matar a un ser humano. De esta manera es fácil calcular que podemos eliminar a la casi totalidad de la población del planeta con todo ese veneno que existe de alguna manera y se distribuye en la superficie de nuestro país, esta en el aire, en los alimentos y si bien los organofosforados no persisten mucho en el medio ambiente, tenemos los organoclorados como por ejemplo el endosulfán, de uso muy común en nuestro medio, y este puede quedar hasta nueve años en la tierra. Uno puede ingerir vegetales seis meses después de fumigados con endosulfan y estos pueden tener síntomas tóxicos. Este producto también es neurotóxico y puede producir temblores, ataxia, convulsiones. Estos dos insecticidas se mueven en paralelo con la evolución de la siembra directa y el glifosato. Si uno mira los gráficos se da cuenta que el crecimiento está relacionado. La gente habla muchas veces del glifosato pero ese no es el problema fundamental, sin los productos que se le agregan como estos insecticidas, que tienen mayor toxicidad. La cosa tiene una mayor implicancia si uno sabe que tanto el endosulfán como los organofosforados están prohibidos en Europa. La Comunidad Económica Europea los ha prohibido completamente y están severamente restringidos en Estados Unidos y en vías de ser eliminados. Contrariamente en Argentina tenemos un crecimiento progresivo de estos productos. Es decir que vamos a contramano de la evolución internacional".

-Usted está radicado en California, ¿qué estudios ha realizado sobre el plaguicidas allí?

-California tiene, quizás, una de las leyes más progresistas de los Estados Unidos para los trabajadores rurales, justamente gracias a César Chavez, el líder sindical de los trabajadores rurales y fundador de la UFW (Unión de Trabajadores Rurales), que es el equivalente de la UATRE en Argentina. Chávez advirtió que los peones rurales se morían envenenados con estos organofosforados e hizo fuerza considerable para conseguir la restricción del uso de estos productos con la ayuda del Partido Demócrata, y particularmente la de Robert Kennedy. Lograron así un conjunto de leyes que reglamentaron y circunscribieron el uso de esos productos, al punto tal que cada trabajador rural tiene que tener un médico asignado, y tiene el derecho a conocer por ley a cuáles tóxicos está expuesto. En este sentido el empleador debe entregarle una hoja donde se describen los síntomas que puede tener, los remedios que se pueden utilizar, y hasta un teléfono del médico que lo va a atender, así como del centro de toxicología más cercano. Además hay inspectores del estado que controlan estos puntos. Esto no quiere decir que el sistema sea perfecto: hay transgresiones como en todos lados.

-¿El Estado tiene una presencia fuerte?

-Así es, el Estado, a través del Departamento de Protección del Medio Ambiente de California es el que autoriza el uso de un plaguicida mediante un formulario. El productor lo presenta y se analiza su uso teniendo en cuenta de los niveles de contaminación en la tierra y el agua, en esta zona que es muy particular, porque está contaminada toda el agua de California. Ellos tienen mediciones muy precisas de este punto y en función de todo esto autorizan o no el uso de ese plaguicida solicitado. Hay un cierto tipo de regulación que si bien no es ideal, sirve. Y por supuesto nadie discute que el endosulfán es cancerígeno, que es neutrotóxico que produce alteraciones endocrinas severas como el retardo en la madurez sexual. Esta no es una cuestión que no sepamos, se sabe pero lo que ocurre es que los intereses comerciales han hecho suficiente lobbie para lograr introducirlos, en ciertos lugares. También hay otros escenarios interesantes, en Estados Unidos por ejemplo hay una compañía que tiene sede en Los Angeles, que se dedica a comprar patentes de plaguicidas que están prohibidos en aquel país, y que obviamente valen una pocas monedas, para después fabricar esos plaguicidas. Y han conseguido que la EPA , que la Agencia de protección al medio ambiente de los Estados Unidos, les otorgue un permiso para exportar ese material que no se puede vender en ese país. El criterio parece ser: no es bueno para nosotros pero si para los países del tercer

mundo. Así nos venden a la Argentina esos productos, y es más, una de esas empresas dedicada a esta actividad tiene sede en nuestro país. Es decir que consumimos productos que otros países prohíben. Pasa algo similar con el endosulfán y los organofosforados: en Europa dicen claramente que proscriben su uso y es porque sin dudas tienen estudios serios fehacientes de que son inaceptables para la salud pública. Así que no es cuestión de averiguar o de hacer estudios epidemiológicos, que hay que hacerlos, pero ya no hacen falta porque en el mundo se sabe cuáles son las cosas peligrosas. Lo que hay que hacer es eliminar los productos que son catastróficos, cosas que el mundo ha desechado y que nosotros seguimos usando porque hay compañías que han usado los mecanismos para seguir imponiéndolos. Por eso es tan importante la Comisión creada por el gobierno argentino para estudiar este tema, y hay que remarcar que es la primera vez que un gobierno manifiesta interés en abordar este problema, es un comienzo más que importante.

-¿Cuáles son los productos más peligrosos con los que se fumiga en la Argentina?

-Probablemente los organofosforados y el endosulfán, que es un organoclorado de la familia del DDT y del clordane, este último produce tumores en el sistema nervioso central y puntualmente está prohibido en nuestro país. Sin embargo el endosulfán que es muy cercano a este producto está habilitado. Por otro lado ahora que se sabe la información completa del ADN, la gente empezó a darse cuenta que compartimos muchas cosas con otros seres vivos: por ejemplo el 40 por ciento de nuestros genes están en las plantas, el 60 por ciento de los genes humanos están en los insectos, y este dato se eleva al 85 por ciento en el caso de los roedores. Es decir que cuando hacemos herbicidas, insecticidas o rodenticidas (raticidas) estos compuestos eligen como blanco de su acción un producto de un gen que nosotros también tenemos. A veces el gen no hace las mismas cosas, pero se identifica básicamente. En el caso de los insecticidas para la mosca de la fruta, el endosulfán ataca su sistema nervioso, que para compararlo con el ser humano serían los mismos efectos que nos produciría el Mal de Alzheimer, nos afecta la memoria. Esto es lo que ataca el endosulfán llegando a producir tumores cerebrales. Lo que quiero decir con esto es que: si pueden destruir insectos también tienen la potencialidad de acabar con nosotros mismos. Se calcula que hay en el mundo 3 millones de intoxicaciones severas por año por plaguicidas y 220 mil muertes, y esto no entra a considerar el cáncer y las enfermedades miodegenerativas crónicas porque son muy difíciles de determinar, ya que a veces evolucionan en veinte años.

-La salud de los argentinos parece hipotecada si uno sigue su análisis.

-Es verdad si se sigue en este camino, por eso creo que tiene que haber un equilibrio entre la producción y la salud de la gente. Si solo pensamos en maximizar las ganancias de la producción y no pensamos en las consecuencias de la salud, esto va a llevar a una catástrofe por la toxicidad de estos compuestos. Lo que hay que recordarle a los responsables es que nadie se puede salvar individualmente, y pretender contraponer a la salud pública las ganancias desmedidas de un determinado grupo es inadmisibles. Debe haber un equilibrio entre ambas cosas, por eso en la aplicación de un agroquímico, el consenso en la Medicina del Trabajo es que los médicos deben participar de la prescripción del plaguicida a utilizar para saber que es lo que pueden esperar de su acción los seres humanos que entran en contacto, tanto el productor, el peón rural y los habitantes de las zonas cercanas. Los médicos quieren participar en este tema pero tienen muchas limitaciones, por ejemplo que son empleados de las ART (Aseguradoras de Riesgo del Trabajo) y estas son empresas con fines de lucro, distinto es en Colombia donde son empresas de bien público, sin fines de lucro.

-Se hace difícil pensar en un modelo de respeto a la salud de los trabajadores rurales cuando en su enorme mayoría ni siquiera existen en los registros, es decir que están en negro.

-Bueno, yo hablo con los trabajadores rurales y me dicen que tienen problemas con su mutual porque esa obra social recibe los casos de intoxicados que la propia ART no atiende, con lo cual para ellos es una carga considerable. Por eso están iniciando por su cuenta planes de educación de los trabajadores rurales, que es una tarea ciclópica en base a la cantidad de gente que significa, además de un territorio tan extendido y con realidades geográficas tan distintas que resulta muy difícil llegar a todos los lugares. Por eso la inserción del Estado en esta temática es urgente.

-¿Cuáles serían las medidas urgentes que se deberían tomar?

-Primero hay que revisar todo el registro de agroquímicos, porque se necesita tener una noción muy clara para saber cómo está posicionada la Argentina con respecto al consenso internacional. Hay convenciones internacionales que han establecido normas y que han identificado plaguicidas que son directamente tan peligrosos que la mayor parte de los países del mundo no los usan, mientras aquí los seguimos usando. Por eso hay que revisar este registro y decidir uno por uno si seguimos usándolo o no. En esto, es verdad, hay posiciones extremas y hay gente que dice que no hay que usar ningún plaguicida, pero sin necesidad de llegar a esa posición porque tampoco podemos detener el aparato productivo, se necesita

llegar a un equilibrio para decidir: hasta aquí llegamos con el aumento de la producción y desde aquí tenemos que sacrificar un poco la producción para preservar la salud. Porque si la Comunidad Europea decidió eliminar el endosulfán y todos los organofosforados, ¿cómo sobreviven sin ellos? En verdad, saben como hacerlo. Entonces hay que ver cómo lo hacen ellos.

-¿Qué otra medida propone?

-Lo segundo es el seguimiento del plaguicida registrado, porque el Senasa registra los productos pero no tiene mecanismos de seguimiento con lo cual no saben en donde se utiliza ni cuánto ni en que circunstancia. Esto es esencial para hacer medicina preventiva: saber cuánto se va a usar, y cuáles son los problemas médicos que pueden ocasionar. Entonces se decide cómo vamos a asignar los recursos de los médicos del trabajo, que son los que van a controlar el tema, tal como pasa en California. Recién allí podremos decir que tenemos una medicina preventiva, porque sino conocemos estos datos básicos, no podemos planificar nada. Por ejemplo si uno mira las estadísticas del SINABE que es el sistema de estadísticas obligatorias del Ministerio de Salud que están en internet, hay datos como Entre Ríos donde figura cero intoxicaciones. Nadie puede creer eso, pero cuando hablo con los médicos me dicen que vieron casos, pero que no los denunciaron porque había que llenar tres formularios, y porque además 'nadie lo mira'. Así, la gente que vende los agroquímicos usa esas estadísticas para mostrar que en la Argentina no hay problemas, y pero aún porque son estadísticas oficiales y es el propio Estado el que termina de difundir esa sensación de que no hay problemas, cuando lo que es un grave problema de sub-registro, que es histórico que es mundial. En los Estados Unidos con todas las mediciones que tiene se considera que solo el 2 o el 3 por ciento de todas las intoxicaciones aparecen en los registros oficiales. Es decir que mientras tiene más de dos millones de trabajadores rurales, tienen 600 mil intoxicaciones de todo nivel. En Argentina en los registros figuran unos 200 casos anuales, esto ni siquiera es un subregistro sino una farsa. La tercer propuesta es establecer una red sanitaria para la atención del problema. Hasta que no lo hagamos no vamos a saber la magnitud del tema.

-En su libro "El mundo según Monsanto" Marie Monique Robin describe la forma en que esta multinacional elige los territorios de prueba de sus semillas transgénicas y sus plaguicidas, define entre otras cosas qué se cultiva, cómo y dónde en el mundo. ¿Comparte ese análisis?

-Esta empresa eligió como sitio de privilegio a la Argentina para expandir después sus productos a toda Latinoamérica. Esto está todo planificado, como un sistema garantizado para expandir el lucro. Lo que debemos pensar es nuestra propia planificación para frenar esa expansión, y hoy no la tenemos.

-¿Qué pasa concretamente con las fumigaciones aéreas en Europa?

-El Parlamento europeo acaba de resolver que van a prohibir toda las fumigaciones aéreas en ese territorio, salvo casos excepcionales documentados y que serán decididos por la autoridad de medio ambiente. Y eso no es casual porque hace muchos años que se sabe su peligrosidad. Es curioso porque me encuentro en este viaje que en Santa Fe se discute si son 300 metros, o 500 metros o mil metros. Y en esto vale recordar una experiencia de hace unos años en Europa: se encontró que el endosulfán que se esparcía por fumigaciones aéreas sobre Alemania, estaba en Groenlandia y en el aire del Artico, es decir que esa cuestión de los límites es ilusoria porque cuando esas sustancias se ponen en contacto con la atmósfera las corrientes convectivas la llevan a la atmósfera superior y los procesos de convección las van a desparramar a todo el planeta. De modo tal que hay que pensar que cuando arrojamamos algo al medio ambiente, no es que lo estamos arrojando acá, en esta pieza, en la casa del vecino, porque una vez que entra en la atmósfera el destino es difícil de determinar. Por eso hay que pensar que Argentina es un país exportador de alimentos y hay que repensar este tema. Más aún Europa ha comenzado a rechazar los sábalos que se pescan en el río Paraná porque tenían un exceso de endosulfán, que está prohibido en Europa y no admiten ese residuo. Ahora, no quiero ni pensar cómo puede afectar a la gente que habita esta zona y que se alimenta de sábalos y otros peces como los que se rechazan afuera.

-¿Cuáles pueden ser las consecuencias sobre la salud de la gente que está en contacto con el endosulfán?

-El endosulfán es un disruptor endócrino, es decir que toman las funciones de ciertas hormonas y se mezclan con ellas. Hubo un estudio en la India, donde se dio una situación curiosa: había una población al pie de una montaña de una plantación de castañas, que era fumigada con endosulfán. Entones se estudio la maduración sexual de los niños durante años, comparándolos entre esa población y otra más alejada, a unos 20 kilómetros. Y se encontró una gran diferencia de maduración sexual, es decir del tamaño de los órganos sexuales, de la aparición del pelo pubiano y del desarrollo de las gónadas. Este retraso de

maduración también afecta al sistema nervioso central, en particular los organoclorados y los organofosforados lo afectan. La afección del endosulfán es comparable a un ataque de epilepsia 24 o 48 horas después de la exposición al mismo. Ha habido en el mundo 'epidemias' de ataques cerebrovasculares, cuando en verdad eran afecciones ligadas al uso de organoclorados, lo que pasa es que los síntomas son parecidos y los médicos a veces confunden las causas verdaderas de la afección. Por eso hace falta una ley para que los trabajadores rurales sepan a qué se exponen, y puedan exigir información. Es la única manera de terminar con este desconocimiento planificado"